

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C, veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Ref. 11001 4003 019 2019 00812 00

I. ASUNTO A TRATAR

Procede el despacho a proferir sentencia dentro del proceso ejecutivo singular promovido por el BANCO DE BOGOTÁ S.A contra INVERSIONISTAS Y PROTECTORES EN SALUD S.A.S, LAURA VALENTINA PALACIOS FAJARDO y NICOLÁS FERNANDO PALACIOS FAJARDO.

II. ANTECEDENTES

Pretensión

El BANCO DE BOGOTÁ S.A instauró demanda ejecutiva singular de menor cuantía contra INVERSIONISTAS Y PROTECTORES EN SALUD S.A.S, LAURA VALENTINA PALACIOS FAJARDO y NICOLÁS FERNANDO PALACIOS FAJARDO, con el fin de obtener el pago de la suma de \$39.599.075 m./cte contenida en el pagaré No. 456584767, junto con los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal certificada por la Superintendencia Financiera, desde la presentación de la demanda, esto es, el 9 de septiembre de 2019 y hasta que se verifique el pago total de la deuda. (fl. 20 a 22, c.1).

Fundamentos fácticos

1.) Para fundamentar sus pretensiones la parte actora adujo, en síntesis, que los demandados el día 27 de agosto de 2019 se constituyeron en deudores de la entidad financiera al suscribir y aceptar el pagaré No. 456584767 por valor \$39.599.075 en los términos oportunidades y cuantías allí señaladas.

2.) Sin embargo, los ejecutados se encuentran en mora en el pago de las obligaciones a su cargo desde el 28 de agosto de 2019, tratándose entonces de una obligación, clara, expresa y actualmente exigible.

III. ACTUACIÓN PROCESAL

1) Mediante auto adiado 17 de octubre de 2019 se libró mandamiento de pago a favor del BANCO DE BOGOTÁ S.A y en contra de los demandados por las sumas solicitadas. (fl.20 c.1).

Posteriormente mediante auto de 15 de enero de 2021 se corrigió la providencia en mención en punto de los nombres de los demandados.

2) La sociedad demandada Inversionistas y Protectores en Salud S.A.S se notificó de forma personal según el acta vista folio 38 de la presente encuadernación, quien dentro del término legal concedido se opuso a las pretensiones del libelo formulando como excepción la denominada “*PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN*”.

De otro lado, los demandados Nicolás Fernando Palacios Fajardo y Laura Valentina Palacios Fajardo se notificaron por conducta concluyente acorde con lo dispuesto en el artículo 301 del Código General del Proceso, quienes dentro del término legal guardaron silencio.

3) De la excepción propuesta se corrió traslado a la parte actora quien se opuso a la prosperidad de la misma.

IV. PROBLEMA JURÍDICO

Observa el despacho que el problema jurídico en el presente asunto radica en determinar si la excepción planteada por la parte ejecutada tiene la virtualidad de enervar en todo o en parte el mandamiento de pago librado.

V. CONSIDERACIONES

1. Cumple precisar que se reúnen a cabalidad los denominados presupuestos procesales necesarios para la normal configuración y trámite del litigio, a saber, la capacidad de las partes, demanda en forma y competencia del Juzgado, obran en el expediente y no se observa causal de nulidad alguna que conlleve a invalidar lo actuado en todo, o en parte, pues se advierte que los diferentes actos procesales se adelantaron con arreglo a las normas que los gobiernan.

2. La acción promovida por el BANCO DE BOGOTÁ S.A es la EJECUTIVA SINGULAR, consagrada artículo 422 y subsiguientes del Código General del

Proceso, cuya finalidad jurídica se orienta a obtener el cumplimiento de una prestación contenida en un documento que provenga del deudor o su causante y que emerja de manera clara, expresa y exigible, para lo cual es necesario que quien la promueve aporte con el libelo introductor un instrumento que cumpla con tales características.

En ese sentido, en cuanto al primer requisito para que un documento pueda ser considerado título ejecutivo, es decir, la **claridad**, implica que la obligación en él contenida se encuentre estructurada de forma lógica, racional y precisa, de manera que, exista plena certeza respecto del objeto de la prestación y de los individuos intervinientes, la persona que se encuentra obligada a cumplir, así como, aquel en favor de quien se ejecutará la misma.

Frente al presupuesto de **expresividad**, éste consiste en que el contenido del documento debe ser entendible sin que haya lugar a realizar una interpretación más allá de la información plasmada en el cuerpo del título basándose en suposiciones o presunciones que den cuenta de la existencia o condiciones de la obligación y finalmente, **la exigibilidad** determina que la obligación pueda ser cobrada por cuanto debe incorporar la forma de vencimiento estando ligada íntimamente al plazo y la condición.

En tal sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el estudio de una acción constitucional, con relación a este tópico precisó:

“La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.

La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida.”¹ (énfasis del despacho).

En aras de satisfacer tal exigencia, el extremo demandante aportó con el libelo introductor el pagaré No. 456584767 suscrito por Ludyn Stella Fajardo Quitan en su calidad de representante legal de Inversionistas y Protectores en Salud S.A.S,

¹ CSJ, Sala de Casación Civil y Agraria STC3298-2019, M.P. Luis Armando Tolosa

Laura Valentina Palacios Fajardo y Nicolás Fernando Palacios Fajardo mediante el cual se obligaron a cancelar a la orden del BANCO DE BOGOTÁ S.A la suma de \$39.599.075 m./cte evidenciándose como fecha de vencimiento el día 27 de agosto de 2019. Documento, que cumple a cabalidad con las exigencias previstas en el Art. 621 del Código de Comercio para todo título valor y las especiales consagradas en el artículo 709 ibídem, pues contiene la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, se señala de forma expresa quien es el acreedor y los obligados cambiarios y su vencimiento es a una fecha cierta y determinada, amén que acredita la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo del extremo demandado y a favor de la ejecutante, es decir, reúnen los requisitos del artículo 422 del C. G. del P. y por tanto presta mérito ejecutivo.

En este orden de ideas, advierte este Despacho que el mandamiento de pago fue librado de conformidad a lo que correspondía, por lo que es necesario adentrarnos al estudio de las defensas propuestas por la pasiva.

3. EXCEPCIONES DE MERITO:

El ejecutado, dentro de la oportunidad consagrada por la ley, puede proponer defensas y excepciones y solicitar las pruebas que la respalden. Facultad debidamente ejercida en el sub-lite, en el que la parte demandada a través de apoderado judicial *controvirtió el proveído intimidatorio, con la denominada: “pago total de la obligación”,* de la cual se realizara su estudio teniendo en cuenta las pruebas y fundamentos aportados para su apoyo.

3.1. PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN:

1. Argumentó la pasiva que al momento de la notificación de la demanda ya se había hecho efectiva la medida cautelar de embargo de los dineros de la compañía en los bancos DAVIVIENDA y COLPATRIA, por las sumas estipuladas en el mandamiento de pago y los oficios de embargo respectivos fueron remitidos a las entidades financieras siendo puestos a disposición del despacho mediante el título judicial correspondiente.

Por su parte, la entidad financiera ejecutante indicó que, argumentando que la entidad demandante no ha recibido las cuantías señaladas en el mandamiento y debidamente actualizadas, razón por la que no ha operado el pago total de las obligaciones, por tanto, la acción ejecutiva debe continuar su legal trámite.

2. Para resolver, cabe señalar en primer lugar, que la solución o pago efectivo, bien sea total o parcial constituye un modo de extinguir las obligaciones y, según lo previsto en el artículo 1626 del Código Civil se traduce en la prestación de lo

que se debe efectuada en los términos acordados, siendo una de las excepciones que se pueden formular en contra de la acción cambiaria, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 784 del Estatuto Mercantil así: *“Contra la acción cambiaria solo podrán proponerse las siguientes excepciones” : (...).“Las que se fundan en quitas o en pago total o parcial, siempre que consten en el título;”* no obstante, para que el pago alegado tenga vocación de prosperidad, es necesario que se acredite de manera fehaciente que para el momento en que se presentó la demanda había ocurrido un hecho que indubitadamente producía la extinción de la obligación parcial o totalmente. Sobre este punto la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá señaló:

*“El Pago es una excepción real, absoluta y personal, pero es el pago, como prestación de lo que se debe (artículo 1626 C.C.) la forma normal de extinguir las obligaciones. Y cuando el artículo 784 dice en su ordinal 7° que podrá oponerse la excepción de pago total o parcial siempre que conste en el título, no es que no pueda excepcionarse si esa constancia no existe, lo que sucede es que en un caso (Ord. 7°) la excepción será real y absoluta y en el otro personal, en el primero podrá oponerse por cualquier deudor a cualquier acreedor y en el segundo solo cuando exista ese vínculo que une al tenedor a las defensas del demandado.”*²

Conforme a lo antes descrito, resulta evidente que cuando se pretende la extinción de una obligación, corresponde al deudor acreditar el cumplimiento de la prestación aportando los medios de convicción idóneos, ello, en atención al principio de carga de la prueba consagrado en el artículo 167 del C.G.P que impone a la parte que alega unas circunstancias necesariamente demostrarlas a cabalidad si pretende deducir algún beneficio a su favor, pues *“Es un deber procesal demostrar en juicio el hecho o acto jurídico de donde se procede el derecho o de donde nace la excepción invocada. Si el interesado en dar la prueba no lo hace, o la da imperfectamente, o se descuida, o se equivoca en su papel de probador, necesariamente a de esperar un resultado adverso a sus pretensiones”* (Corte Suprema de Justicia G.J.t, LXI (61), Pág. 63).

Ahora bien, el pago será válido en la medida que se efectúe a favor del acreedor, una persona designada por éste para que realice el cobro o a una persona que la ley o el juez autorice a recibir en nombre de aquel, de modo que no puede hacerse en favor de un tercero no autorizado, salvo que el mismo acreedor lo ratifique bien sea de manera expresa o tácita. En tal sentido el tratadista Álvaro Tafur González en comentarios al artículo 1634 del Código Civil expresó que:

“Para que el cumplimiento de cualquier obligación sea eficaz y produzca los efectos que normalmente debe producir el pago, o sea la extinción de la obligación, se requiere que se haga al acreedor.

² Exp: 04-20000573 01. Tribunal Superior de Bogotá. Sala Civil. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo.

Si sólo una persona tiene la calidad de acreedor, a esa persona debe hacerse el pago; pero si esa calidad la tienen varias y no existe solidaridad activa para el recibo de la prestación, entonces cada acreedor sólo recibe eficazmente la parte de prestación que le corresponde, y si una de ellas recibe el total, habrá pago de lo no debido por lo que recibió sin tener derecho a recibir”³

3. Bajo los anteriores derroteros descendiendo al caso puesto a consideración del despacho se advierte que la sociedad demandada alegó como excepción de mérito el pago total de la obligación con los dineros embargados al interior del asunto; no obstante, cumple precisar que ello se dio con ocasión a la presentación de la demanda y como una medida cautelar para garantizar el cumplimiento de la obligación objeto de cobro de encontrarse acreditados los presupuestos para seguir adelante la ejecución, por tanto no podría constituir un pago efectivo en los términos del artículo 1626 del Código Civil.

Lo anterior, en virtud a que no se efectuó de manera voluntaria por parte del acreedor para extinguir en la forma acordada la prestación a su cargo, sino que es producto de una orden judicial sin que pueda entenderse que implica una transferencia de dinero en favor del acreedor, toda vez que, la entrega de dineros al ejecutante solamente es aplicable luego de surtido el trámite correspondiente, una vez ejecutoriado el auto que apruebe la liquidación del crédito de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 447 del Código General del Proceso que al tenor reza: *“Cuando lo embargado fuere dinero, una vez ejecutoriado el auto que apruebe cada liquidación del crédito o las costas, el Juez ordenara su entrega al acreedor hasta la ocurrencia del valor liquidado.”*

En ese orden de ideas, carece de asidero jurídico el argumento expuesto por la parte ejecutada, pues los dineros embargados por cuenta del presente proceso no han salido de su patrimonio para conformar el patrimonio del acreedor. Y si bien, los mismos pueden cubrir la totalidad del monto de la obligación acá ejecutada, la entrega al demandante no se hace efectiva hasta tanto no se surtan las etapas procesales correspondientes.

4. Sean las anteriores razones suficientes por las cuales se negará el medio exceptivo propuesto, en su defecto, se ordenará seguir adelante con la ejecución y en consecuencia realizar la liquidación del crédito.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

³ Álvaro Tafur González, Código Civil, artículo 1634 (2021) pag 585, Leyer Editores

VII. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR infundada la excepción de mérito planteada por el extremo demandado, por las razones consignadas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR seguir adelante la ejecución conforme el mandamiento de pago librado.

TERCERO: Decretar la venta en pública subasta los bienes embargados al demandado y los que posteriormente se llegaren a embargar.

CUARTO: Practíquese la liquidación del crédito conforme lo normado en el artículo 446 del C. G. del P.

QUINTO: Condenar en costas de esta instancia a la parte demandada y a favor de la parte ejecutante. Para lo cual téngase como agencias en derecho la suma de \$1.771.935 m./cte.

Liquídense.

Notifíquese y cúmplase,⁴

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ**

Firmado Por:

**IRIS MILDRED GUTIERREZ
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

⁴ Este proveído se notificó por estado No. 67 de 23 de junio de 2021.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3119af24a71a38b4fe783eb096a0e8dc5355d14f7e793e2498f121143ddcc679**

Documento generado en 22/06/2021 12:33:29 PM